



Con fecha 15 de marzo de 2023 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio solicitud de acceso a la información pública formulada por [REDACTED] al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La solicitud quedó registrada con el 00001-00077951.

El 17 de marzo de 2023, fecha a partir de la cual comienza a contar el plazo de un mes para su resolución previsto en el art. 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se recibió esta solicitud en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que es el órgano competente para resolver.

El texto de la solicitud de información es el siguiente:

Copia de los expedientes LSSI/23/20, LSSI/23/21, LSSI/23/22, LSSI/23/23, LSSI/23/24, LSSI/23/25, LSSI/23/26, LSSI/23/27, LSSI/23/28, LSSI/23/29 Y LSSI/23/30.

Una vez analizada la solicitud núm. 00001-00077951, esta Secretaría de Estado

RESUELVE

DENEGAR EL ACCESO a la información solicitada por [REDACTED], conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Se concluye que es preciso limitar el derecho de acceso con base en el artículo 14.1.e) y g) de la Ley 19/2013, ya que supondría un perjuicio de la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; y de las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.

En coherencia con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en particular con su criterio interpretativo 2/2015 que exige la realización del test del daño y del interés público al valorar la aplicación de las causas de denegación del acceso a la información del artículo 14 de la Ley 19/2013, se concluye que un conocimiento de los expedientes sancionadores podría suponer la revelación de la actuación de la autoridad competente, en perjuicio de los intereses públicos presentes y futuros, comprometiendo los principios enumerados en las letras e y g) del precepto citado.

De acuerdo con cuanto antecede, no procede la remisión de la copia de los expedientes de referencia.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). En ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Firmado electrónicamente

La Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Carme Artigas Brugal